

# EL AJUSTE DE LA EMPRESA PÚBLICA: UN TEMA PENDIENTE

Las empresas públicas son un claro exponente de la falta de ajuste frente a la crisis: En vez de reacomodar su capacidad productiva han respondido con planes de inversión, con «una huida hacia adelante» o bien con políticas de planes de diversificación, entrando en nuevas actividades para evitar enfrentarse con la necesidad de la adaptación.

En el trabajo de **Alvaro Cuervo García** se analiza la actual situación de la empresa pública en España, con especial atención a sus cuentas de resultados, niveles de inversión y evolución del empleo. Las rigideces de las empresas públicas ante la actual situación obedecen a sus particularidades organizativas, tanto en el terreno administrativo como en el político-sindical. Si a estos factores de carácter institucional se añaden los de índole económico-financiera se explica con mayor facilidad que la empresa pública apenas haya comenzado a corregir sus desajustes.

## I. INTRODUCCION

**T**ODO estudio de la empresa pública debe comenzar delimitando el ámbito de la misma. Para ello, se ha considerado como relevante la capacidad de control de la empresa por las administraciones públicas; de manera que, atendiendo a las formas de propiedad-control y a la objetividad e importancia de éstas, pueden distinguirse dos grupos de empresas públicas:

a) Empresas públicas con participación mayoritaria de las administraciones públicas en su capital social y/o control de las mismas en aplicación de figuras del derecho público —delegados del gobierno—, considerando no sólo la empresa matriz, sino también sus filiales y sub-filiales.

b) Empresas públicas en las que las administraciones públicas no poseen la mayoría del capital social ni utilizan procedimientos de derecho público en su control, pero en las que se presupone *iuris tantum*, una capacidad de control directa o indirecta de aquéllas, porque se posea una participación minoritaria significativa, se establezcan convenios o contratos con ellas, o porque se asuma la responsabilidad última de su financiación, u otro sistema que suponga influencias determinantes en sus decisiones.

En el presente análisis, cuando se habla de empresas públicas se consideran las definidas como tales en el sentido más estricto; y, dentro de ese conjunto, se estudian las dependientes del Estado. No se analizan las empresas públicas vinculadas a las comunidades autóno-

mas ni a las corporaciones locales. Igualmente queremos precisar que, salvo indicación expresa, nos referimos a las empresas públicas con participación directa y mayoritaria de la Administración estatal, sin incluir las filiales y subfiliales. De acuerdo con esto, se consideran empresas públicas estatales (1):

1) Los *holdings* empresariales (corporaciones) públicos:

a) Empresas dependientes del Instituto Nacional de Industria (INI): participaciones directas y mayoritarias, filiales y sub-filiales del mismo.

b) Empresas con dependencia de la Dirección General del Patrimonio del Estado (DGPE) por capital mayoritario público, con participación directa o indirecta.

c) Empresas con dependencia del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), con participación directa o indirecta mayoritaria.

2) Las empresas públicas (empresa matriz, filiales y sub-filiales) dependientes de su respectivo Ministerio funcional, bajo la forma de:

a) Entidades y sociedades estatales con dependencia directa del Ministerio tutelar.

b) Servicios comerciales sin personalidad jurídica: Correos y Telecomunicaciones.

c) Organismos autónomos industriales, comerciales y financieros de régimen general o especial.

## II. BASES PARA EL ESTUDIO DE LA EMPRESA PÚBLICA EN ESPAÑA

El análisis de las empresas públicas se enfrenta, en España,

con la ausencia de un inventario completo de las mismas. Se conocen las empresas públicas que son propiedad directa y mayoritaria de la Administración estatal con sus filiales y subfiliales (2); pero no se dispone de información sobre las que pudieran ser definidas como tales a partir de presunciones *iuris tantum* de control directo o indirecto por la Administración; los servicios industriales y comerciales de las corporaciones locales ni las empresas públicas controladas por las corporaciones locales y entidades autonómicas. Tampoco se poseen datos sobre las participaciones individuales de las carteras de valores de algunas empresas públicas financieras.

A esta carencia, hasta fechas muy recientes, de inventario, se añade la dificultad de obtener información; ésta es escasa e imprecisa. No es explicable la ausencia de «memorias» en muchas empresas; los cambios en los criterios contables, que imposibilitan la comparación histórica; las continuas rectificaciones en las memorias de los datos de los años precedentes, que hacen dudar de los del ejercicio que se presenta, rectificaciones que se acentúan con los cambios en las presidencias; las disparidades, en cifras de partidas tan significativas como las subvenciones, entre las que facilitan algunas empresas y las que se obtienen del «Informe económico del sector público del Ministerio de Hacienda», etc.

Con las limitaciones expuestas, el estudio económico-financiero de la empresa pública puede partir de tres fuentes de datos:

1) La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que proporciona:

A) Las cuentas de las empresas públicas. Cuenta consolidada conforme al sistema de cuentas de la Contabilidad Nacional, diferenciando las empresas públicas financieras y no financieras. Los datos de estas últimas se refieren a un conjunto de 138 empresas en 1975-76, 205 en 1977, 246 en 1978, 292 en 1978-80, 317 en 1981 y 345 en 1982. Es una base para el estudio de la empresa, más que en valores absolutos, en cuanto a estructura y tendencia. Los diferentes modos de cálculo de las magnitudes en este análisis —Contabilidad Nacional— hacen que se encuentren, en algunos casos, distintos valores para conceptos similares conforme a la contabilidad empresarial.

B) La Central de Información Contable de Empresas Públicas (CICEP), organismo de estudio dentro de la IGAE que ha publicado el *Estudio sobre el Sector Público Empresarial*, donde no se incluyen ni los organismos autónomos comerciales, industriales y financieros, ni las empresas públicas financieras. Los datos se refieren a las 379 empresas públicas no financieras, si bien las empresas que han facilitado la información completa son: 210 en 1981, 233 en 1982 y 244 en 1983. La información obtenida, con base en el cuestionario enviado a las empresas, se presenta consolidada y desagregada sectorialmente.

2) Las memorias de los *holdings* (INI, INH y DGPE) y de las empresas dependientes del Ministerio tutelar y, en el caso de los organismos autónomos comerciales, industriales y financieros, el presupuesto y las «cuentas de liquidación» del mismo. Estos datos se refieren al conjunto de la empresa pública

controlada directa y mayoritariamente por la Administración estatal y no están consolidados.

3) La Central de Balances del Banco de España recoge 130-131 empresas públicas en el estudio 1981-82 y 236-245 en el avance de los años 1982-83. Los datos se presentan agregados a través del balance, estado de origen y aplicación de fondos, cuentas de resultados y *ratios* económico-financieros; lo que permite una comparación con las empresas privadas (3).

### III. COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA ANTE LA CRISIS

Al estudiar la respuesta de la empresa pública ante la crisis, es preciso enfatizar las particularidades organizativas de la misma, que explican, en parte, su conducta.

En la toma de decisiones —dentro de la teoría de la empresa— se trabaja con la analogía individuo-empresa. Se plantea, pues, el tema de la decisión como un proceso simple del tipo: estímulo-respuesta (precio-cantidad a producir). Este planteamiento hace abstracción del fenómeno organización, abstracción no lícita en el análisis económico, ni en el empresarial. Es necesario tener en cuenta la presencia, en toda organización, del conflicto interdepartamental, entre propietarios del capital y trabajadores, etc.; en la empresa pública entre Administración, *holdings* y empresas; y, asociado a éste, el tema del poder político. Los elementos vinculados al poder explican, en muchos casos, por qué ante un estímulo determinado no se ha obtenido la respuesta esperada; cómo

mo las restricciones políticas están impidiendo llevar a cabo la planificada reconversión de los sectores básicos.

No hay organización sin relaciones conflictivas y de poder. Esto se acentúa en la empresa pública, en donde se ve cómo las decisiones de la Administración se retrasan o se dificulta su puesta en práctica, debido a que aquélla se olvida de la organización interna de los *holdings* y empresas públicas.

La empresa pública se caracteriza organizativamente por poseer unas estructuras burocratizadas, muy centralizadas, como luego comentaremos, unos rígidos estatutos de personal, un personal fuertemente sindicalizado, sin confianza en la dirección. En ellas, la dirección se siente amenazada, con responsabilidad y sin poder, pues considera que este último lo tienen los políticos, y a la par se encuentra esclerotizada por el corporativismo, se preocupa de defender sus privilegios, de actuar conforme a mandatos para satisfacer las demandas, los deseos del poder.

Ante la crisis, esta estructura difícilmente se anticipa, sólo reacciona ante la presión externa; es más, todos los actores juegan en el sentido de conservar su posición y frenar cualquier cambio. La empresa genera unas pautas organizativas, un conjunto de actitudes y comportamientos hostiles a la introducción de cambios, no digamos de ajustes. La empresa adquiere a los ojos del personal una identidad propia a la cual se adhieren y desean perpetuar.

En esta situación, ante la imposibilidad real de quiebra, ante la falta de objetivos claros fijados por la Administración, sin

exigencias de responsabilidad (ni se premia ni se castiga), todo el proceso de decisión tiende a trasladar los problemas al más alto nivel jerárquico posible (un ejemplo es quién lleva el peso de la reconversión industrial en España).

Es una dirección que no asume el riesgo empresarial, pues en muchos casos carece de autonomía para ello; una empresa con garantías de supervivencia. No existe una relación dialéctica, que explica el dinamismo empresarial, entre: *a)* la empresa y su entorno: unos recursos financieros escasos, mercados competitivos, exigencias de innovación tecnológica, y *b)* la empresa y sus miembros: unas relaciones laborales flexibles, exigencias de dividendos, etc., que eviten la holgura que elimina la dinámica empresarial.

Ello explica algunas de las diferencias de la empresa pública con la empresa privada ante la crisis, el freno a la aplicación de las necesarias medidas de ajuste en la empresa pública, las diferencias en los niveles de conflictividad del ajuste. La empresa, como organismo vivo, tiene el límite de los procesos de equilibrio, entre aportaciones y compensaciones, en su propia supervivencia. Cuando ésta se garantiza, los trabajadores tienen una concepción arraigada de fijeza intrínseca en el puesto; cuando se pierde la lógica económica en la asignación de fondos, se reafirman en sus exigencias y surge una lógica política facilitada por el nivel de sindicalización y la conducta de determinados poderes públicos.

Otro nivel organizativo que también afecta al necesario ajuste de la empresa pública ante la crisis es, sin duda, el institucional: las organizaciones de la

Administración (estatal y autonómica); no pueden olvidarse de que todo cambio en el sector de las empresas públicas está condicionado por los grupos y cuerpos de la Administración, por las implicaciones que origina una nueva distribución del poder político en el interior de la Administración, de sus cuerpos de funcionarios. En la realidad, cualquier modificación en la organización actual viene determinada por el sentir patrimonial de ciertos cuerpos de funcionarios, de los directivos de los *holdings* y empresas, de los equipos ministeriales con atribuciones sobre las empresas públicas.

En la mayoría de los países se han producido respuestas institucionales ante la crisis: *a)* creando entidades orientadas al saneamiento, reconversión y nuevos proyectos, que requieren estructuras organizativas adaptadas a esos fines, y *b)* diseñando planes de redimensionamiento de la empresa pública. En España, hasta el momento, no ha sido posible.

En muchas naciones, como he indicado, se han creado instituciones especializadas en el estudio y diseño de políticas de estabilidad, supervivencia o cierre de determinadas empresas; para, *a posteriori*, devolverlas al sector privado o integrarlas en el correspondiente *holding* público. Se trata de entidades especializadas, pues esta acción de reconversión, de hospital, no es conveniente que sea ejecutada por los *holdings* sectoriales, poco eficientes en este tipo de actividades por su fin y su estructura, y que, además, generarán expectativas en los trabajadores de su integración en el sector público, etc.; tal es el caso de GEPI-Italia, IRC-Reino Unido, IDI-Francia. En España se teme

la pérdida de poder, el conflicto institucional, en todo nuevo diseño organizativo.

La formación del conjunto de empresas públicas no obedece, en la mayoría de los casos, a razones estratégicas previas, sino que las nacionalizaciones se explican con argumentos que van desde las necesidades de reconstrucción a las consideraciones técnico-sociales que han conducido a la nacionalización de sectores básicos (energía, transporte), de empresas privadas abocadas a la quiebra, por reconversiones o renovaciones de sectores o por programa político. En consecuencia, se ha ido constituyendo un conjunto heterogéneo de empresas, en su mayoría por aluvión —hospital de empresas— y de resultados del propio crecimiento de las existentes, que hacen necesario un plan de redimensionamiento. Así, en 1983, Romano Prodi, presidente del IRI, crea la Comisión de Dimensionamiento; aunque, en 1980, el gobierno Thatcher ya había comenzado su plan de desnacionalizaciones. En ambos casos, desde gobiernos ideológicamente no homogéneos, se presenta un plan para vender acciones o partes de empresas que excedan las necesidades de control; activos no relevantes para la actividad principal de la empresa; y empresas no estratégicas; y además, en el caso inglés, desregulaciones que limitan los monopolios del Estado (Alemania también desarrolla un plan con idéntica finalidad).

En España aún no se ha podido desarrollar ninguna comisión dedicada a reformular el tamaño del sector público empresarial por las razones expuestas; el sentir patrimonial sobre la empresa pública, que impide

que se generen cambios desde ella misma o los *holdings*; el temor a perder poder impide su reducción, sin contar con las inercias de comportamiento.

Ante la crisis no ha habido respuestas institucionales, ni tampoco estratégicas en el sentido empresarial.

Las empresas públicas son un claro exponente de la falta de ajuste frente a la crisis; antes al contrario, en vez de reacomodar su capacidad productiva han respondido, como luego veremos, con planes de inversión, con «una huida hacia adelante» o bien con políticas de planes de diversificación, entrando en nuevas actividades para evitar enfrentarse con la necesidad de la adaptación. Esta, pues, no se ha realizado, es tema pendiente. Pero lo más preocupante es el hecho de que las estrategias no son diseñadas con tal objetivo en la empresa pública.

Los cambios en la estrategia, como en la estructura interna, son consustanciales al cambio en el entorno, mucho más acentuados con la pérdida de control progresivo de la empresa sobre el mismo (4). Por ello, de la planificación estratégica se ha pasado a una dirección estratégica, que pueda responder al acortamiento de los horizontes de la predicción, la imprevisibilidad del cambio y las sorpresas estratégicas. El reforzamiento de la capacidad de anticipación y adaptación son las notas distintivas de la nueva actitud estratégica.

El cambio en la estrategia empresarial no se ha producido en la empresa pública con la profundidad y el dinamismo necesarios. No ha existido un proceso de adaptación al entorno, es más, se constata la existencia de una estrategia, no formulada

expresamente, cual es la del crecimiento y mantenimiento de la organización, dado que toda organización tiene una estrategia (C. E. Lindblom habla de incrementalismo) con las notas de falta de estrategia explícita y formal, vinculada a la solución de problemas contingentes, ausencia de objetivos precisos y una posición reactiva a las nuevas oportunidades, al desarrollo de productos. En ella no existe un acoplamiento entre la organización y el medio externo, una respuesta en el tiempo por medio de la adaptación producto-mercado, previa determinación de la evolución futura a seguir por la empresa, que permita aprovechar sus ventajas competitivas.

La empresa pública se plantea como norma de actuación una estrategia de crecimiento (ofensiva). Basta ver sus objetivos propuestos en orden a intensificar la penetración en el mercado, el desarrollo de mercados, la expansión geográfica y la diversificación; así como criterios de evaluación: ventas, participación en el mercado, cifras de exportación, etc.

Sólo en algunas empresas se desarrollan estrategias de estabilidad y se presentan propuestas de reducción-contracción para alcanzar el ajuste producto-mercado y contrarrestar el efecto del ciclo económico, aumentar la rotación para restablecer los beneficios, teniendo como metas el rendimiento sobre activos y ventas y la rentabilidad de los capitales.

Lamentablemente, la estrategia a seguir en muchas empresas públicas ante la crisis debería ser la de supervivencia (defensa total), reflejo de una situación de quiebra o insolvencia que exige la reestructuración de

la administración de la empresa, una evaluación de su posición producto-mercado y de su financiación. Ello supone cambios en la alta dirección de la empresa, en las estrategias, en la estructura organizativa y en los objetivos, que hagan más efectivas sus acciones. Una política de desinversión, eliminando segmentos de nulo potencial, sin ninguna ventaja competitiva y, finalmente, una reconstrucción de su estructura financiera.

En los años de crisis la empresa pública ha agravado el desajuste de los costes de producción, con la consiguiente pérdida de competitividad, consecuencia de los incrementos salariales, superiores a la productividad, del sobredimensionamiento de las plantillas, acentuando el déficit público como consecuencia de sus pérdidas

y las consecuentes necesidades de aportación de fondos públicos vía transferencias corrientes y de capital.

Es más, podemos confirmar cómo, ante una demanda decreciente, en vez de ajustar su capacidad de producción, en muchos casos, ha planteado planes de inversión, «supuestas diversificaciones», financiados total o parcialmente con fondos públicos, en una clara estrategia de «huida hacia adelante», de aplazamiento a la solución de ajuste. Como recoge el profesor R. Myro (5), en la empresa pública se plantea un objetivo de crecimiento con expansión generalizada en las cifras de ventas, de VAB en todos los sectores, lo que implica fuertes exigencias de inversión.

Si negativa es la falta de ajus-

te, más lo es la incapacidad demostrada para anticiparse y adaptarse a los efectos de la crisis. Desde la óptica empresarial, las notas que caracterizan a la dirección eficiente son su capacidad de innovación-anticipación y de adaptación al entorno. La empresa pública española, en este caso, al igual que la privada, no supo adelantarse a la situación de crisis sectorial (siderúrgico, naval, etc.); en sectores donde la privada presenta ajustes positivos no se producen en el caso de la pública (automoción, transportes marítimo-aéreo, agroalimentaria, turismo, etc.). No son, en fin, justificables las pérdidas de las empresas públicas en sectores con demanda estable o creciente.

#### CUADRO N.º 1

##### TOTAL EMPRESAS

##### DATOS REFERIDOS A LAS EMPRESAS CONTROLADAS, CON PARTICIPACION DIRECTA Y MAYORITARIA

(En millones de pesetas)

	1980	1981	1982	1983
Número de empresas .....	798	930	990	1.072
Con participación directa y mayoritaria .....	188	196	194	194
Filiales y subfiliales .....	180	238	266	300
Con participación minoritaria .....	430	496	530	578
Empleo (a 31-XII) .....	567.286	538.967	556.167	558.134
Inversión real .....	464.433	589.793	672.579	706.430
Ingreso explotación .....	2.590.440	3.086.904	3.773.523	4.252.394
Valor Añadido Bruto .....	1.112.157	1.277.377	1.464.390	1.649.069
Subvención a la explotación, cargas impropias .....	87.257	117.519	128.115	128.365
Beneficio o pérdida .....	- 67.606	- 120.782	- 181.880	- 227.206
Subvenciones, compensación pérdidas, inversión, etcétera .....	73.729	186.061	187.580	197.637

Fuentes: Memorias INI, IHN y DGPE. 1980, 1981 y 1982. Los datos de 1983 son provisionales, obtenidos a partir de la información facilitada por los holdings. Memorias anuales de las Sociedades y Empresas Estatales y Correos. Presupuesto y Liquidación del Presupuesto 1980, 1981, 1982 y 1983 en los OACIF.

CUADRO N.º 2

	EMPLEO		VAB		FBCF		VALOR MEDIO DE EMPLEO, VAB Y FBCF	
	1979	1982	1979	1982	1979	1982	1979	1982
Comunidades Europeas (CEE) ...	11,9	12,8	13,2	14,1	22,5	22,9	15,8	16,6
ESPAÑA .....	5,6	6,06	8,05	8,17	20,0	19,28	11,2	11,2
Francia .....							17,8	22,8
Italia .....							20,0	20,0
Alemania .....							12,8	14,0
Gran Bretaña .....							18,7	16,7
Benelux .....							9,6	10,0
Dinamarca .....							10,0	12,0
Grecia .....							19,0	22,3
Irlanda .....							13,0	15,0
Portugal .....							22,6	23,9
Austria .....							23,0	23,0

Fuente: D. A. Bizaguet, *L'impact économique des entreprises publiques de la CEE. Annales du CEEP*. Bruselas, 1984, y elaboración propia.

#### IV. LA EMPRESA PÚBLICA ESPAÑOLA ANTE LA CRISIS

El conjunto del sector empresarial público estaba integrado, en 1983, por 494 empresas estatales: 194 empresas participadas directa y mayoritariamente y 300 filiales y subfiliales. Las empresas con participación minoritaria eran cerca de 600 (no se consideran ni el Banco de España, ni Rumasa, ni las empresas del Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios).

Conforme a la subdivisión institucional diferenciamos:

1) «Holdings» empresariales, con un control mayoritario sobre 374 empresas (253 el INI, 31 el INH y 90 la Dirección General de Patrimonio del Estado).

2) Empresas públicas dependientes del Ministerio funcional, que son Correos, 86 organismos autónomos comerciales, industriales y financieros y empre-

sas filiales, y 33 empresas y entidades estatales.

La importancia del conjunto del sector público empresarial se refleja en las cifras más significativas de las *empresas controladas directa y mayoritariamente por el Estado*. (La importancia de las filiales y subfiliales se estima entre un 10 y un 15 por 100 de las empresas controladas directamente) (cuadro n.º 1).

La empresa pública estatal (con control directo), en 1983, daba empleo a 558.134 personas, generaba unos ingresos de explotación de 4,2 billones, un valor añadido bruto de 1,6 billones y una inversión de 706.430 millones. La importancia del sector público empresarial se puede sintetizar mediante el análisis de su participación o peso en las principales macromagnitudes. En 1983 representaba el 5,2 por 100 del empleo nacional, el 7,7 por 100 del PIB a coste de los factores y el 16,4 por 100 de la FBCF.

A efectos de comparación con otros países, se suele partir de su peso o participación en las macromagnitudes empleo, valor añadido bruto y formación bruta de capital fijo, excluida de las mismas la participación de la agricultura. Para expresar en una cifra el peso económico de la empresa pública, se utiliza la media de los tres criterios antes mencionados (cuadro n.º 2).

En España, la fuerte variación en el empleo de la empresa pública es consecuencia de la caída del total nacional más que del aumento del sector público empresarial. Lo que se constata es que, a excepción de Gran Bretaña e Italia, se produce un crecimiento global del sector público empresarial después del segundo *shock* del petróleo de 1979. De hecho, ha existido un incremento global, de manera continuada, de la empresa pública en este decenio de crisis, de forma particular en los primeros años, al intentar los gobiernos utilizar la empresa pú-

blica como acción anticrisis. El relanzamiento de la actividad económica está motivando una caída o estancamiento en el peso del sector público empresarial.

El sector público empresarial español tiene, pues, un peso muy inferior al de la media del de los países de la Comunidad. El problema de la empresa pública no es el de su importancia o peso en la economía española, sino el de su *ineficiencia*, su falta de ajuste positivo a la crisis, como reflejan sus déficit crecientes.

Hace poco el profesor Fuentes Quintana escribía: «El déficit constituye la expresión final de una creciente presión social dirigida a petrificar estructuras productivas sin futuro a costa del presupuesto o gastos de reparto de renta para sostener niveles de consumo sin incorporar valor añadido alguno. El déficit público se configura así como el coste del inmovilismo económico, como la negativa de la sociedad a realizar el necesario proceso de cambio económico impuesto por la crisis».

El «coste» total para la Administración de la empresa pública puede verse como el reflejo externo del ajuste pendiente. La estimación de dichos costes la podemos hacer de dos formas:

A) Considerando las transferencias corrientes y de capital a las empresas públicas (no se incluyen otras subvenciones, como asunción de deudas por el Estado) (cuadro n.º 3). La estimación de las mismas no es fácil de cuantificar, dado que, si bien se conocen las concedidas a los organismos autónomos comerciales, industriales y financieros, las del resto de las em-

CUADRO N.º 3  
**TRANSFERENCIAS DEL ESTADO A LAS EMPRESAS PUBLICAS**  
(Millones de pesetas)

	1980	1981	1982	1983
<b>Ytansferencias corrientes</b> (subvenciones explotación):				
• Organismos autónomos comerciales, industriales y financieros ... ..	39.593	53.780	76.838	101.543
• Correos y Telecomunicaciones.	20.461	19.308	23.742	27.409
• Resto empresas públicas ... ..	111.642	127.223	198.532	155.641
<i>Total</i> ... ..	171.696	200.311	299.112	284.593
<b>Transferencias de capital</b> (subvenciones y aportaciones de capital):				
• Organismos autónomos comerciales, industriales y financieros ... ..	144.679	167.983	223.021	212.337
• Resto empresas públicas ... ..	43.088	82.983	95.322	104.612
<i>Total</i> ... ..	187.767	250.931	318.343	316.949
<b>TOTAL</b> ... ..	359.463	451.242	617.455	601.542
Incremento anual (%) ...	—	25,53	36,83	— 2,58

Fuentes: Cuentas de las Administraciones Públicas de los años 1980, 1981 y 1982. I.G.A.E.: «Cuentas de las Empresas Públicas», 1980, 1981 y 1982, y Sección de Cuentas del Sector Público. Datos en términos de obligaciones contraídas anualmente.

presas públicas no se presentan diferenciadas del total de empresas. Esta aportación de fondos se realiza a través de:

1) Subvenciones corrientes; unas vinculadas a determinados productos o servicios-compensaciones de cargas impropias, y otras destinadas a compensar los déficit o pérdidas de las empresas.

2) Subvenciones de capital; que integran las subvenciones de capital vinculadas a inversiones necesarias pero no rentables con estrictos criterios económicos, los procesos de reconversión, reindustrialización, asunción de deudas (principal e interés), y las aportaciones para incrementos del capital. Se incluyen estas

últimas porque estimamos que las ampliaciones de capital en empresas con pérdidas (lo son en mayoría) son subvenciones encubiertas.

De acuerdo con este criterio, el total de transferencias del Estado a las empresas públicas ha sido de 359.463 millones en 1980, 451.242 en 1981, 617.455 en 1982 y 601.542 millones en 1983, con un incremento anual del 25,53 por 100 en 1981, 36,83 por 100 en 1982 y -2,6 por 100 en 1983 (6).

B) Considerando la suma del total de subvenciones recibidas (subvenciones de explotación más subvenciones compensación pérdidas, etc.) a partir de los datos de las empresas (que

no recogen las transferencias de capital), las subvenciones han sido de 160.982 millones en 1980, 303.580 en 1981, 315.696 en 1982 y 326.002 millones en 1983, con un crecimiento anual del 88 por 100 en 1981, 4 por 100 en 1982 y 3,2 por 100 en 1983. Las diferencias en el crecimiento son consecuencia de los momentos en que se produce la consignación presupuestaria de las subvenciones y su contabilización.

Finalmente, dado que los déficit de las empresas a medio o largo plazo repercuten sobre el Estado, una forma de medir el «coste» de la empresa pública es a través de la suma de subvenciones de explotación más resultados. En este caso se ha pasado de 154.863 millones en 1980, a 238.301 millones en 1981, a 309.995 millones en 1982 y a 355.571 millones en 1983, lo cual supone un incremento del 53,8 por 100 en 1981, 30,1 por 100 en 1982 y 14,70 por 100 en 1983 (cuadro n.º 1).

En cuanto a las dos entidades con mayores pérdidas en valores absolutos: Grupo INI y RENFE, su comportamiento es como sigue:

a) En el caso del INI (véase anexo II), su cuenta de resultados pasa de -72.973 millones en 1980 a -204.000 millones en 1983 (se incluyen las pérdidas por resultados corrientes, 161.542 millones), correcciones de valoración de existencias en astilleros y bienes de equipo (34.091 millones) y otros ajustes. A esto hay que añadir las subvenciones de explotación recibidas, 27.134 millones en 1983 (no se computan como subvención las compensaciones de carbón siderúrgico). De estas pérdidas, las que corresponden a las empresas de los sectores en

crisis (siderurgia, construcción naval y bienes de equipo) han alcanzado 115.280 millones, es decir, el 56 por 100 de las pérdidas totales. Si se añaden las de SEAT, 35.780 millones, e IBERIA, 23.409 millones, se explica el 86 por 100 de las pérdidas totales.

b) En cuanto a RENFE, las pérdidas han pasado de 67.285 millones en 1980, a 79.857 millones en 1981, a 128.980 millones en 1982, y a 159.810 millones en 1983. Las subvenciones de explotación recibidas y la compensación de pérdidas han sido 65.105 millones en 1980, 54.500 millones en 1981, 82.122 millones en 1982 y 105.000 millones en 1983, y las transferencias de capital de 23.541 millones en 1980, 21.807 millones en 1981, 23.658 millones en 1982 y 48.700 millones en 1983.

Los datos anteriores se pueden complementar y contrastar con las «Cuentas de las empresas públicas no financieras» (anexo I). Conforme a dicha fuente, con datos consolidados, el resultado financiero es -70.567 millones en 1980, -129.293 millones en 1981 y -136.360 millones en 1982. La suma de pérdidas más subvenciones de explotación asciende a 263.291 millones en 1980, 320.205 millones en 1981 y 402.713 millones en 1982. Por su parte, el «Estudio del Sector Público Empresarial» -CICEP- refleja como cifra de pérdidas más subvenciones de explotación 220.852 millones en 1981, 322.922 millones en 1982 y 406.789 millones en 1983.

Las cifras de resultados no son homogéneas. Al incluir filiales y subfiliales estos dos últimos estudios, y estar consolidados, no permiten una estricta comparación con el resto; aho-

ra bien, en todas las fuentes y formas de medida se confirma la regularidad en el ritmo de crecimiento de los déficit. En síntesis, las transferencias corrientes y de capital entre 1980 y 1983 se multiplican por 1,6, con un incremento medio acumulativo del 17,44 por 100. Las subvenciones de explotación más las pérdidas de las empresas en el periodo 1980-83 se han multiplicado por 2,02, con un incremento medio del 26,5 por 100 anual. Si se excluye de estos datos a los servicios y organismos autónomos, comerciales, industriales y financieros, las pérdidas y subvenciones de explotación se multiplican por tres en el periodo 1980-83, con unos incrementos anuales del 44 por 100. Estas cifras son bastante similares a las del estudio del sector público empresarial -CICEP- en cuanto a ritmo de crecimiento y volumen de las pérdidas. Medidas de una forma u otra, las pérdidas de las empresas públicas en el periodo 1980-83 se triplican y las pérdidas más las subvenciones de explotación se duplican.

Con estos datos, no ofrece dudas que en el sector público empresarial no ha existido una política de ajuste, más bien parece evidenciarse que se ha desarrollado una estrategia de inversión, de crecimiento, para evitar el ajuste o aplazar su realización. Así se deduce del comportamiento del empleo, la inversión y los ingresos (véanse cuadros núms. 1 y 4).

El empleo ha pasado de 567.286 personas en 1980 a 558.134 personas en 1983. Si no se consideran los cambios de las empresas incluidas en las memorias anuales del INI, el empleo es de 552.600 individuos en 1980 y 558.134 en 1983, refle-

CUADRO N.º 4

TOTAL EMPRESAS

(Sin incluir servicios comerciales, ni organismos autónomos, industriales, comerciales y financieros)

DATOS REFERIDOS A LAS EMPRESAS CONTROLADAS, CON PARTICIPACION DIRECTA Y MAYORITARIA

(En millones de pesetas)

	1980	1981	1982	1983
Número de empresas .....	706	840	901	985
Con participación directa y mayoritaria .....	100	110	109	111
Filiales y subfiliales .....	176	234	262	296
Con participación minoritaria .....	430	496	530	578
Empleo (a 31-XII) .....	433.905	417.133	432.095	433.191
Inversión real .....	423.416	507.443	545.794	550.451
Ingreso explotación .....	2.305.903	2.794.295	3.398.650	3.828.738
Valor Añadido Bruto .....	891.285	1.071.574	1.212.132	1.360.268
Subvención a la explotación, cargas impropias .....	24.149	50.316	49.801	44.347
Beneficio o pérdida .....	- 88.590	- 133.452	- 213.525	- 293.655
Subvenciones, compensación pérdidas, inversión, etcétera .....	65.134	181.417	176.022	188.000

Fuentes: Memorias INI, IHN y DGPE. 1980, 1981 y 1982. Los datos de 1983 son provisionales, obtenidos a partir de la información facilitada por los holdings. Memorias anuales de las Sociedades y Empresas Estatales y Correos. Presupuesto y Liquidación del Presupuesto 1980, 1981, 1982 y 1983 en los OACIF.

jando un leve aumento del empleo del sector público empresarial, aunque en 1983 se produce una caída, que contrasta con las pérdidas de puestos de trabajo en dichos años en la economía española y en el sector industrial en particular.

Por su parte, la inversión real era de 464.433 millones en 1980 y 706.430 millones en 1983. Su ritmo de crecimiento ha sido de un 27 por 100 en 1981, 14 por 100 en 1982 y 5 por 100 en 1983; lo que parece indicar que en 1983 se comienza a ver la necesidad del ajuste, al romperse la tendencia de crecimiento de inversiones.

Los ingresos de explotación han sido: 4,25 billones en 1983, 3,77 billones en 1982, 3,08 billones en 1981 y 2,59 billones en

1980, con un crecimiento del 19 por 100 en 1981, 22,2 por 100 en 1982 y 12,69 por 100 en 1983.

Las empresas públicas generaban un valor añadido bruto a coste de factores de 1,64 billones en 1983, 1,46 billones en 1982, 1,27 billones en 1981 y 1,11 billones en 1980, con un aumento del 13,9 por 100 en 1981, 14,6 por 100 en 1982 y del 12,6 por 100 en 1983. Todo parece demostrar que en el año 1983 se produce la inflexión en las políticas de expansión y crecimiento del sector público empresarial; así, la relación entre la inversión real y los ingresos del conjunto de las empresas públicas ha sido el 17,93 por 100 en 1980, 19,10 por 100 en 1981, 17,82 por 100 en 1982 y 16,61 por 100 en 1983.

## V. PROBLEMAS DE EFICIENCIA EN LA EMPRESA PUBLICA

En el estudio de la empresa pública se presentan, como explicable justificación a su ineficiencia, las cargas de subcapitalización, o deficiencias en la estructura de capital, y las «cargas impropias» u obligaciones impuestas a las mismas ajenas al mercado.

La estructura de capital o relación capitales ajenos/capitales propios, ha sido en la empresa pública española el 1,76 en 1980, 2,23 en 1981, 2,3 en 1982 y el 2,7 en 1983.

Los datos desagregados del cuadro n.º 5 reflejan grandes diferencias entre los diferentes conjuntos de la empresa pública (7).

*A priori*, debemos recordar que no se pueden emitir juicios valorativos sobre el endeudamiento y su evolución, dado que en muchos casos su disminución es consecuencia de la revalorización de activos, más que de nuevas aportaciones de fondos, pero, en todo caso, la bondad o no de una estructura de capital viene determinada comparando el coste de la deuda con la rentabilidad de los capitales o inversión; es decir, a través de los denominados efectos «apalancamiento».

Por ello, la demanda de ampliaciones de capital como solución de las denominadas cargas de subcapitalización no puede olvidar dos hechos: En primer lugar, la eficiencia en la asignación de recursos se plantea unida a las actividades más productivas. Aquí y ahora, las asignaciones de fondos del Estado no son en función de expectativas, ni en función del grado de cumplimiento de objetivos. En el caso de ampliaciones de capital, no se buscan aquellas empresas con expectativas de beneficios, que desarrollan mejores técnicas, sino aquellas que están en quiebra técnica. Es una asignación negativa, en cuanto toda empresa rentable sabe que tendrá problemas para

autorizaciones de ampliaciones de capital, o incluso será fuente de reasignación. Si se analizan las cifras del PAIF (Programa de Actuación, Inversión y Financiación) del INI en 1984 y el previsto para 1985, la ampliación de fondos para compensar pérdidas, cierres y reestructuraciones es el 57,3 por 100 en 1984, y el 55,14 por 100 en 1985. Del resto de los fondos aplicados, los destinados a ampliaciones de capital en empresas en reconversión y en crisis es el 26,6 por 100 en 1984 y el 36,31 por 100 en 1985. En suma, los fondos destinados a empresas no afectadas por el ajuste es solamente el 15 por 100 en 1984 y el 8,55 por 100 en 1985. Estas cifras son reflejo de una asignación de fondos centrada en el pasado. En segundo lugar, toda ampliación de capital en empresas sin expectativas de beneficios es una subvención encubierta.

El principal problema de la empresa pública no está en su estructura de capital sino en la rentabilidad de sus inversiones. Para los *tres holdings*, la rentabilidad de la inversión media, medida por el *ratio* beneficio más gastos financieros con relación al inmovilizado medio, ha sido el 7,5 por 100 en 1980, 8,3 por

100 en 1981, 6,68 por 100 en 1982 y 6,22 por 100 en 1983. (En el estudio de la Central de Balances del Banco de España, el porcentaje es, para el total de la empresa pública, del 4,48 por 100 en 1982 y el 3,62 por 100 en 1983; en el CICEP, el porcentaje es aún inferior, al no incluir las subvenciones de explotación como ingreso).

Otra forma de medir dicho problema es partiendo del margen de ventas y de la rotación. El margen de ventas o de ingresos (beneficio/ventas) era -2,61 por 100 en 1980, -3,91 por 100 en 1981, -4,82 por 100 en 1982 y -5,34 por 100 en 1983. Si se excluyen los servicios comerciales y los organismos autónomos industriales, comerciales y financieros, su evolución es -3,84 por 100 en 1980, -4,77 por 100 en 1981, -6,28 por 100 en 1982 y -7,66 por 100 en 1983 (véase cuadro n.º 4).

Por su parte, el índice de rotación (ventas/activo total) es 0,60 en 1980, 0,60 en 1981, 0,62 en 1982 y 0,64 en 1983, recogiendo una ligera mejoría en el uso de los capitales, aunque diferenciado del *ratio* de las empresas privadas, como más adelante comentaremos. La caída de la rentabilidad viene explicada en la empresa pública por la caída de su margen de ventas.

La causa de la caída del margen está en el ajuste pendiente más que en la capacidad generadora de ventas de la empresa pública. Esta genera un valor añadido que equivale al 42,93 por 100 de la venta en 1980, 41,38 por 100 en 1981, 38,89 por 100 en 1982 y 38,76 por 100 en 1983. (Si se excluyen los servicios y organismos autónomos de carácter comercial, industrial y financiero, estos porcentajes

CUADRO N.º 5

CAPITALES AJENOS / CAPITALES PROPIOS

	1980	1981	1982	1983
INI ... ..	3,39	4,48	5,02	5,31
INH ... ..	2,92	3,22	3,47	2,87
DGPE (sin empresas financieras) ...	0,82	1,00	1,13	1,30 (*)
Empresas y entidades estatales ...	0,82	1,18	1,45	1,38

(\*) Dato provisional.

CUADRO N.º 6

**ESTADO DE RESULTADOS (DATOS AGREGADOS)**  
**AVANCE 1982-1983**  
(Datos en porcentajes)

CONCEPTOS	EMPRESA PUBLICA		EMPRESA PRIVADA	
	1982	1983	1982	1983
Ventas netas e ingresos accesorios a la explotación ...	89,34	92,34	98,04	98,22
+ Variación de existencias de productos terminados y en curso ...	1,64	-0,26	0,77	0,60
+ Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.	4,22	2,56	0,90	0,85
+ Subvenciones a la explotación ...	4,78	5,35	0,26	0,30
= Producción o venta de mercaderías, y subvenciones ...	100,00	100,00	100,00	100,00
- Compras netas ...	42,53	43,42	59,10	59,12
+ Variación de existencias, de primeras materias y mercaderías ...	1,38	1,29	1,00	1,37
- Trabajos, suministros, transportes, fletes y diversos ...	17,38	16,63	11,13	11,39
- Tributos ...	5,76	5,30	0,39	0,34
= Valor Añadido Ajustado ...	35,70	35,93	30,36	30,51
- Gastos de personal ...	21,89	21,97	18,74	18,18
= Resultado económico bruto de la explotación ...	13,80	13,95	11,62	12,33
- Dotación amortizaciones ...	6,71	7,29	4,10	4,22
- Dotación neta de provisiones y provisiones de explotación e insolvencias ...	0,95	1,34	0,59	0,62
= Resultado económico neto de la explotación ...	6,14	5,32	6,91	7,48
+ Ingresos financieros ...	1,13	1,36	0,90	1,10
+ Intereses activados ...	1,71	1,69	2,97	3,30
- Gastos financieros ...	11,34	11,63	8,69	9,13
- Diferencias de valoración en moneda extranjera ...	0,14	0,25	0,54	0,48
+ Resultados extraordinarios y de la cartera de valores ...	-0,38	-0,47	-0,49	0,00
= Resultado financiero ...	-2,86	-3,97	1,05	2,27

son: 38,6 por 100 en 1980, 38,35 por 100 en 1981, 35,66 por 100 en 1982 y 35,52 en 1983). En el valor añadido han aumentado su participación los gastos financieros y se mantienen los de personal. En las empresas de los *holdings* (INI, INH y DGPE) los gastos financieros eran el 20,5 por 100 del valor añadido y los gastos de personal el 58,96 por 100 en 1980, frente al 27,6 y 57,98 por 100, respectivamente, en 1983.

Este comentario, realizado para

el conjunto de la empresa pública, debe ser matizado en una desagregación institucional (anexo II). El INH, se puede ver a través de sus cifras, no presenta problemas significativos de ajuste, una vez efectuado el del subsector petroquímico; la Dirección General del Patrimonio del Estado, dada su heterogeneidad, tiene pendiente el ajuste en sus empresas industriales (textil, calzado), transporte marítimo, etc. Pero es, sin duda, en las empresas del INI y el conjunto de sociedades estatales

(RENFE, FEVE) donde se encuentra pendiente, con más exigencia, el proceso de ajuste.

Finalmente, es de utilidad completar el estudio de eficiencia con un análisis comparativo entre empresas públicas y privadas. Hemos realizado el análisis a partir de la *Central de Balances del Banco de España*, «Avance del Análisis Económico-Financiero, Ejercicios 1982-1983» (1.587 y 1.595 empresas privadas, 236 y 245 empresas públicas). La muestra, en este estudio, se

CUADRO N.º 7

EJERCICIO DE 1982  
ESTADO DE EQUILIBRIO FINANCIERO  
(Porcentajes sobre total = 100)  
(Datos agregados)  
AVANCE 1982-1983

	EMPRESA PUBLICA		EMPRESA PRIVADA	
	1982	1983	1982	1983
<b>ACTIVO</b>				
ACTIVO INMOVILIZADO NETO (1) ...	82,41	83,71	79,84	83,09
Inmovilizado material ...	102,27	101,08	99,94	102,52
Inmovilizado inmaterial ...	1,83	1,92	0,53	0,46
Inmovilizado financiero ...	5,01	6,24	4,37	5,77
Gastos amortizables ...	6,65	7,18	2,90	2,35
Amortizaciones y provisiones de inmovilizado ...	- 33,36	- 32,71	- 27,91	- 28,03
ACTIVO CIRCULANTE NETO (3) ...	17,58	16,28	20,15	16,90
<i>De la explotación</i> ...	18,94	17,57	22,13	19,12
Existencias ...	16,66	14,72	14,34	12,51
Clientes ...	15,08	14,82	19,28	16,99
Proveedores ...	- 12,80	- 11,97	- 11,49	- 10,38
<i>De fuera de la explotación</i> ...	- 4,96	- 4,51	- 6,20	- 5,75
Otros deudores ...	7,34	7,10	3,06	3,06
Otros acreedores ...	- 11,01	- 10,42	- 7,95	- 7,70
Ajustes por periodificación y otros ...	- 1,30	- 1,19	- 1,32	- 1,10
<i>Tesorería</i> ...	3,60	3,22	4,22	3,53
Caja y entidades de crédito deudoras ...	3,60	3,22	4,22	3,53
TOTAL (1 + 3) ...	100,00	100,00	100,00	100,00

	EMPRESA PUBLICA		EMPRESA PRIVADA	
	1982	1983	1982	1983
<b>PASIVO</b>				
FINANCIACION PERMANENTE (2) ...	87,60	86,39	87,08	88,33
<i>Patrimonio neto</i> ...	38,13	38,70	48,53	50,87
Capital ...	18,49	17,80	18,73	15,95
Cuentas actualización y revalorización ...	11,37	13,35	21,17	27,10
Reservas y otros ...	8,26	7,55	8,61	7,81
<i>Recursos ajenos medio y largo plazo</i> ...	49,46	47,68	36,55	37,45
Obligaciones y bonos ...	8,74	7,55	9,84	8,69
Préstamos a medio y largo plazo de entidades de crédito ...	32,30	32,77	24,46	25,64
Préstamos a medio y largo plazo de otros ...	8,41	7,35	4,25	3,12
FINANCIACION BANCARIA A CORTO PLAZO (4) ...	12,39	13,60	12,91	11,66
Préstamos a corto plazo de entidades de crédito ...	10,48	11,69	7,34	6,71
Efectos comerciales descontados ...	1,91	1,91	5,57	4,95
TOTAL (2 + 4) ...	100,00	100,00	100,00	100,00

considera representativa de la realidad de la mediana y gran empresa (cuadros núms. 6 y 7).

Ante el tema que nos preocupa, las notas que caracterizan o diferencian a la empresa pública son:

1. En cuanto al activo en 1982 y 1983, la diferencia es el mayor peso del inmovilizado material y de existencias. Explicable por razones sectoriales y por el período de maduración de materias primas y productos en curso y terminados, que es en total 129 días en la pública y 90 días en la privada. Igualmente ocurre con sus períodos medios de cobro y pago, 126 y 147 días respectivamente, frente a 103 y 90 días. Ello implica ineficiencia de gestión de *stocks* y tensiones financieras. En el caso de clientes, inmovilización de fondos afectados por el riesgo interempresas y por la inflación. La explicación consideramos que no sólo es consecuencia de las diferencias sectoriales, en concreto, del dispar peso de la construcción naval.

2. En cuanto a la estructura de capital, la nota diferenciadora es el fuerte endeudamiento (relación de fondos ajenos —incluidos créditos provisión— a fondos propios) de la empresa pública, 2,27 por 100 en 1982 y 2,19 por 100 en 1983, frente a 1,40 por 100 en 1982 y 1,34 por 100 en 1983 en la empresa privada. Ahora bien, estas diferencias deben matizarse, pues en los fondos propios, en 1983, las cuentas de actualización y revalorización representan el 53,3 por 100 de los fondos propios en la empresa privada, frente al 34,5 por 100 en la empresa pública.

3. En su dinámica, presenta un mayor crecimiento en sus ventas (15,70 por 100 en 1982

y 15,9 por 100 en 1983) la empresa pública, frente al 14,60 por 100 en 1982 y 15 por 100 en 1983 de la privada. Asimismo, el aumento del total activo ha sido, en 1982, el 12,38 por 100 para el sector privado y el 16,90 por 100 para el sector público. En 1983, debido a las regularizaciones del inmovilizado y al aumento de gastos amortizables (consecuencia de diferencias de valoración en moneda extranjera), el aumento del total activo ha sido el 28 por 100 en la empresa privada y el 20 por 100 en la empresa pública. Sin incluir regularizaciones, el aumento ha sido del 7,4 por 100 el inmovilizado productivo y el 11 por 100 el circulante. En todo caso, la empresa pública ha seguido una política de una menor revalorización de sus activos.

4. Ante los flujos económicos o cuenta de resultados, destaca la empresa pública por: a) las subvenciones de explotación recibidas, que son el 4,8 por 100 de la venta en 1982 y el 5,4 por 100 en 1983, frente al 0,26 por 100 en 1982 y el 0,30 por 100 en 1983 en el sector privado; b) el mayor peso de los gastos de personal, 21,97 por 100 de la venta en 1982 y 21,89 por 100 en 1983 en la empresa pública, frente al 18,74 por 100 en 1982 y 18,18 en 1983 en la privada. Este dispar peso de los gastos de personal es consecuencia, en parte, de la mayor remuneración al personal en la empresa pública (1,76 millones de coste medio de personal en 1982 y 1,99 millones en 1983 en la empresa pública, frente a 1,68 millones en 1982 y 1,90 millones en 1983 en la privada); c) la participación de los gastos financieros en la venta es consecuencia de su mayor endeudamiento. Así, los gastos financieros

eran, en la empresa pública, en 1982, el 11,34 por 100 de la venta y el 11,62 por 100 en 1983, y en la privada el 8,64 y el 9,43 por 100, respectivamente.

El resultado bruto es, en 1982, el 11,62 por 100 en la privada y el 13,81 por 100 en la pública, y en 1983, el 12,33 y el 13,96 por 100, respectivamente. El beneficio o resultado financiero sobre ventas, debido a la mayor dotación para amortizaciones y menor activación de intereses, es en la privada el 1,05 por 100 en 1982 y el 2,27 por 100 en 1983, y el -2,86 por 100 en 1982 y el -3,97 por 100 en 1983 en la empresa pública.

En cuanto al reparto de rentas generadas por la empresa y su flujos financieros, la situación de la empresa pública es dramática, dado que sólo el 7,22 por 100 en 1982 y el 7,29 por 100 en 1983 se queda en la empresa, y el repartido al accionista es el 2,85 por 100 en 1982 y el 2,66 por 100 en 1983 de la renta generada. Ello implica que la autofinanciación, que representa el 26,09 por 100 en 1982 y el 30,23 por 100 en 1983 en la empresa privada, sea prácticamente nula en 1982 y el 13,75 por 100 en 1983 en la empresa pública. Ello refleja la total dependencia de los fondos ajenos en los procesos de inversión.

Una vez comentadas las diferencias en el balance y en los flujos económicos —cuenta de resultados— y financieros —estado de origen y aplicación de fondos—, finalizamos con el análisis de la rentabilidad económico-financiera (cuadro n.º 8).

La empresa pública obtiene un inferior rendimiento a las ventas (en parte consecuencia de su mayor dotación para amortizaciones), una menor rotación

CUADRO N.º 8

	EMPRESA PRIVADA		EMPRESA PÚBLICA	
	1982 (%)	1983 (%)	1982 (%)	1983 (%)
Rendimiento (resultado económico/ventas) ... ..	6,91	7,48	6,14	5,32
Rotación activo neto total ventas/Inmovilizado neto más circulante neto ... ..	0,79	0,71	0,72	0,68
Rentabilidad o rendimiento de la inversión ... ..	5,47	5,31	4,48	3,62
Coste financiero aproximado de los recursos ajenos remunerados ...	13,38	13,20	13,37	12,94
Rentabilidad financiera de los recursos propios a final de año ...	1,72	3,17	- 5,48	- 7,00

a sus activos y, en consecuencia, una menor rentabilidad a sus inversiones. Ante un coste del capital ajeno gastos financieros/recursos ajenos remunerados, al 31 de diciembre, del 13,20 por 100 en 1982 y del 12,94 por 100 en 1983, con una rentabilidad media de la inversión del 4,48 por 100 en 1982 y el 3,62 por 100 en 1983, la rentabilidad de los fondos propios es -5,48 por 100 en 1982 y -7,10 por 100 en 1983. Si se tiene en cuenta el coste medio de la deuda, que ha sido el 14,23 por 100 en 1982 y el 14,03 por 100 en 1983, y no se consideran las subvenciones, ni los intereses activados, la rentabilidad de los fondos propios será el -17,92 por 100 en 1982 y el -20,27 por 100 en 1983.

La mejor rentabilidad de la empresa privada es consecuencia, como indicábamos, del mayor rendimiento en ventas y rotación en el activo y, aun contando con mayor coste de la deuda, la mayor activación de gastos financieros (36 por 100 en 1983 de los gastos, frente al 15 por 100 en la pública) hace

que presente unas tasas de rentabilidad de fondos propios positivas: 1,72 por 100 en 1982 y 3,17 por 100 en 1983.

La empresa pública, pues, no ha corregido sus desajustes, ello es más difícil que en la privada; ahora bien, su ajuste es necesario para colaborar al equilibrio global de la economía. Si no corregimos estos desajustes productivos, la reactivación será un fenómeno pasajero.

Las cifras comentadas deben ser matizadas, dado que se exige el desglose sectorial para una correcta comparación y tener presente las limitaciones de un indicador de eficiencia como el beneficio o la rentabilidad, dado el carácter de la empresa pública de ser medio de la legitimidad del sistema e instrumento de la política económica. La existencia de objetivos extraeconómicos está unida a la empresa pública. De otro lado, no podemos olvidar que el beneficio es consecuencia del grado de monopolio, de la eficiencia técnico-organizativa y del efecto apalancamiento. La dispar situación en que se encuentran la

empresa pública y la privada ante estos hechos, unida a las cargas impropias que la Administración impone a aquélla, hace necesario matizar los comentarios sobre los resultados, evitando el maniqueísmo de considerar un sector privado eficiente y un sector público ineficiente. Es preciso medir su acción ante el sistema global o como instrumento de la política económica conforme a criterios de economías comparativas, de eficacia (logros de metas). Ello no debe hacer olvidar, sin embargo, la magnitud de las subvenciones, sus ineficiencias manifiestas, que hacen urgente un estudio de sus funciones y comportamiento ante la crisis; una mejora de eficiencia que implica exigencias de responsabilidad ante los resultados de muchas de las empresas.

## VI. CONCLUSIONES

El análisis de las empresas públicas en España tiene dificultades por la ausencia de un inventario completo de las mismas, la escasez e imprecisión de la información existente y los cambios en los criterios contables, que imposibilitan la comparación histórica; a pesar de los esfuerzos que se están realizando en los últimos años en la mejora del nivel y calidad de la información proporcionada por la IGAE, la Central de Balances del Banco de España y los *holdings* y empresas.

La respuesta de la empresa pública ante la crisis viene influenciada por las particularidades organizativas de la misma: burocratización, centralización, nivel de sindicalización y condicionamiento de su actividad por los grupos directivos de los

*holdings* y equipos ministeriales. Todos los actores en relación con la empresa juegan para conservar su posición y frenar cualquier cambio. Cuando se garantiza la supervivencia de la empresa y se pierde la lógica económica en la asignación de fondos, surge la lógica política, facilitada por el nivel de sindicalización y la conducta de determinados poderes públicos. Por otro lado, la incertidumbre originada por la falta de objetivos claros y las exigencias de responsabilidad pública fomentan el traslado del proceso de decisión al más alto nivel directivo y reducen la administración de la empresa a la mera ejecución de directrices recibidas, lo cual no favorece la anticipación y adaptación al entorno.

Los problemas de la empresa pública española provocados por la crisis no han recibido respuestas institucionales, bien realizando una acción tipo «hospital de empresas», con estructuras organizativas adaptadas a esos fines, bien diseñando planes de redimensionamiento de la empresa pública, de desinversión. Tampoco las empresas han proporcionado respuestas estratégicas; antes al contrario, en vez de reacomodar su capacidad productiva han respondido con una «huida hacia delante», teniendo como objetivo el crecimiento —como demuestran las cifras de inversión, empleo y ventas— para evitar o aplazar el ajuste, si bien esta tendencia se rompe en 1983. La ineficiencia del sector empresarial público español se traduce en déficit crecientes que obligan a unas transferencias corrientes y de capital que han superado los 600.000 millones en 1983. De hecho, la suma de subvenciones de explotación y pérdidas superó, en 1983, los

350.000 millones. En síntesis, en el periodo 1980-83 las pérdidas de las empresas públicas se triplican y las pérdidas más subvenciones de explotación se duplican. Estas cifras reflejan el ajuste pendiente en nuestra empresa pública.

Dicho ajuste exige la reconstrucción de los fondos propios de las empresas y la consiguiente recuperación de la tasa de rentabilidad de la inversión. El principal problema de la empresa pública no está en su estructura de capital o relación capitales ajenos/capitales propios (1,76 en 1980 y 2,7 en 1983; en el INI, 5,31), sino en la rentabilidad de sus inversiones, que debe mejorarse. Para ello es necesario que aumente el margen sobre ventas y la rotación. El descenso de ambos está reflejando el ajuste pendiente y recogiendo la participación de la estructura, gastos de personal y dotaciones de amortización, dado que el origen de la caída del margen son los costes y la incapacidad de su traslado al precio, más que el crecimiento de las ventas.

Por su parte, la deficiente estructura de capital refleja dos hechos: la escasa o, mejor, nula autofinanciación de las empresas públicas y la asignación del capital propio por la Administración antes para evitar quiebras técnicas que en función de expectativas de rentabilidad, por lo que son subvenciones encubiertas; de hecho, la inversión de la empresa pública se tiene que financiar con recursos ajenos.

En los flujos económicos de la empresa pública (Central de Balances del Banco de España) destaca el peso de los gastos de personal sobre ventas, con-

secuencia, en parte, del mayor coste medio del personal que en la privada, y una mayor participación de los gastos financieros, debido al mayor endeudamiento. Las dotaciones a amortizaciones son mayores que en el sector privado y menor la activación de gastos financieros; en consecuencia, el margen sobre ventas o beneficio/ventas ha sido de -3,97 por 100 en 1983, habiendo recibido como subvenciones de explotación el 5,4 por 100 de la venta.

La rentabilidad de la inversión o rentabilidad del activo neto era en la empresa pública, en 1983, el 3,62 por 100 y, dado que el capital ajeno tiene un coste del 12,94 por 100, la rentabilidad de los fondos propios era el -7 por 100, que pasa a ser el -20,73 por 100 si no se consideran las subvenciones ni la activación de intereses.

En resumen, la empresa pública apenas ha comenzado a corregir sus desajustes, hecho explicable por las dificultades que debe afrontar, que no por ello pueden impedir la adaptación a las nuevas circunstancias, en un intento por recobrar el equilibrio global de la economía y lograr una reactivación continuada. Tal parece ser la pretensión del INI en 1984, como se desprende de las estrategias que recientemente ha diseñado y que apuntan hacia el ajuste como objetivo de las políticas del sector empresarial público.

## NOTAS

(1) Las cuentas de las empresas públicas (Ministerio de Economía y Hacienda) diferencian entre:

1. Servicios Comerciales del Estado y organismos autónomos industriales, comerciales y financieros (no incluidos).

2. Empresas controladas por el Estado: entidades de derecho público controladas por el Estado, sociedades con participación mayoritaria del Estado y empresas privadas controladas por el Estado.

3. Sociedades controladas por el INI y el INH.

(2) *Relación de empresas no financieras participadas por el Sector Público Estatal*, CICEP, IGAE, Madrid, 1984.

(3) La información obtenida en estas fuentes no es homogénea:

a) Las cuentas que publica la IGAE se refieren a las empresas públicas financieras y no financieras con una agrupación institucional y sectorial, con cambios en el número de empresas públicas, no sólo conse-

cuencia de cambios en la ordenación y dependencia institucional, sino de nuevas inclusiones. El estudio de la CICEP puede ser base de comparación con el obtenido a partir de las memorias de las empresas por su similitud en la metodología contable empleada. Ambos recogen tanto las empresas públicas estatales con participación directa y mayoritaria de las administraciones públicas como sus filiales y subfiliales.

b) Los datos que proporcionan las memorias de los *holdings* o corporaciones se refieren al conjunto de empresas públicas con participación directa y mayoritaria de la Administración pública estatal. Son datos agregados.

c) Finalmente, la Central de Balances del Banco de España proporciona una muestra representativa para un análisis comparativo con el sector privado en términos de *ratios* o índices; con valores agregados.

(4) H. I. ANSOFF, «Planificación de la gestión empresarial ante el cambio», *Marketing Actualidad*, enero 1978, págs. 11-21.

(5) Rafael MYRO, «Estrategia de crecimiento y rentabilidad de la empresa pública

en España. Un análisis del Plan Estratégico del Grupo INI para el periodo 1984-1988». Ponencia del Seminario *La Empresa Pública*, UIMP, Santander, julio 1984.

(6) En el presupuesto de 1984 las transferencias corrientes y de capital a las empresas públicas, sin incluir las que corresponden a los propios organismos autónomos comerciales, industriales y financieros, ascienden a 480.000 millones. En las transferencias corrientes a empresas el incremento en 1984 es superior al 50 por 100, evitando así la necesidad de los obligados suplementos de créditos por no recoger como subvención la realidad del déficit de explotación de muchas empresas públicas. Un análisis detallado a partir del Presupuesto se tiene en SANCHEZ REVENGA J., «La Empresa Pública en el Presupuesto de 1984», *Hacienda Pública Española*, n.º 85, 1983, páginas 279-287.

(7) Los datos agregados de la Central de Balances del Banco de España nos indican un *ratio* de endeudamiento de 2,27 en 1982 y 2,19 en 1983, y en el estudio del CICEP (datos consolidados) es de 2,54 en 1981, 3,02 en 1982 y 3,35 en 1983.

# ANEXO I OTROS ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL

CUADRO B

**ESTUDIO SOBRE EL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL ESTATAL**  
**EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS**  
**(Participadas mayoritariamente directa e indirectamente)**  
**(No se incluyen ni servicios, ni organismos autónomos comerciales e industriales)**  
**(En millones de pesetas)**

	1981	1982	1983
Número de empresas públicas ...	379	379	379
Empresas tratadas ...	210	233	244
Empleo (210 empresas tratadas).	437.595	437.694	429.300
Ventas netas e ingresos accesorios ...	2.581.143	3.043.458	3.550.804
Subvenciones a la explotación...	134.564	211.817	212.796
Valor añadido ...	900.851	1.068.383	1.214.356
Gastos personal ...	650.846	767.082	875.593
Resultado económico neto ...	43.482	33.075	27.464
Gastos financieros ...	289.028	366.381	443.220
Resultado ejercicio ...	— 220.858	— 322.922	— 406.789
Inmovilizado material ...	2.955.428	3.323.134	3.926.249
Total Pasivo ...	5.044.158	5.849.023	6.770.369

Fuentes: Análisis del Sector Público Empresarial en el ejercicio 1983 y su evolución en el trienio 1981-83. Central de Información Contable de Empresas Públicas (CICEP), IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda, 1984.

Las subvenciones de explotación aparecen reflejadas pero no se computan en el cálculo del resultado.

CUADRO A

**EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS (Cuenta Consolidada)**  
**(Millones de pesetas)**

	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Número de empresas ...	205	246	292	242	317	345
Producción de bienes y servicios...	1.154.359,1	1.492.140,2	1.838.632,7	2.592.178,7	3.051.349,8	3.653.977,8
Valor Añadido Bruto ...	548.805,5	748.733,6	856.812,0	1.012.986,2	1.182.485,5	1.405.491,4
Subvenciones de explotación ...	60.720,4	91.287,4	142.003,0	192.723,7	190.912,1	266.353,6
Remuneración de los asalariados ...	324.417,7	456.580,2	544.065,8	694.630,1	786.767,1	922.506,4
Excedente neto de explotación ...	88.958,0	127.446,8	135.666,5	176.072,1	200.824,0	287.786,6
Intereses efectivos pagados ...	73.502,8	97.974,7	118.324,4	194.597,1	265.993,5	360.862,0
Renta neta disponible ...	— 15.824,3	— 11.816,2	— 60.791,8	— 115.292,4	— 182.352,2	— 197.402,8
Resultado financiero ...	13.258,6	23.913,5	— 18.705,0	— 70.567,6	— 129.293,1	— 136.360,7
Ahorro bruto (autofinanciación) ...	40.848,0	75.455,0	44.236,3	26.696,3	3.069,4	11.878,7
Formación bruta capital fijo ...	249.190,2	266.383,3	316.334,9	377.351,9	499.086,5	648.389,1
Transferencias de capital (recibidas) ...	82.071,4	5.004,0	129.424,1	172.789,1	214.194,5	358.082,8
Necesidades de financiación ...	196.153,8	278.496,5	274.911,5	470.988,4	532.923,6	458.497,3

Fuentes: Cuentas de las empresas públicas de los años 1975-76, 1977, 1978, 1979-80, 1981 y 1982. IGAE. Ministerio de Economía y Hacienda. 14 empresas financieras.

## A. CUENTAS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS - CONTABILIDAD NACIONAL

Complementamos el análisis anterior con las «Cuentas de las empresas públicas no financieras» (IGAE) (cuadro A) (1). En síntesis, los datos en el período 1977-82 nos indican el crecimiento de los ingresos —producción de bienes y servicios, 1,5 billones en 1977 y 3,65 billones en 1982—, que se multiplican por 3,16, el valor añadido por 2,56 y la inversión (249.190 millones en 1977 y 648.384 millones en 1982) por 2,6. Frente a este crecimiento, las subvenciones de explotación se multiplican por 4,38 (60.720 millones en 1977 y 266.353 en 1982) y, a pesar de dicho aumento, el resultado financiero de la empresa evoluciona desde 13.248 millones de beneficio en 1971 a una pérdida de 136.360 millones en 1982.

Consecuencia del crecimiento, de la caída del beneficio y del ahorro empresarial es que de una tasa de autofinanciación, ahorro bruto/FBCF, del 16,39 por 100 en 1977, se ha pasado al 1,83 por 100 en 1982, es decir, nula; ello ha obligado a que las necesidades de financiación se hayan multiplicado por 2,63 y las transferencias de capital por 4,36.

En cuanto a su estructura de resultados, cae el peso del beneficio/ventas del 1,15 por 100 en 1977 a —3,77 por 100 en 1982; las subvenciones aumentan, 5,26 por 100 de la producción en 1977 y 7,19 por 100 en 1982; al igual que los gastos financieros/ventas, 6,36 por 100 en 1977 y 9,87 por 100 en 1982; por su parte, los gastos de personal disminuyen su participación en las ventas, 28,10 por 100 en 1977 y 25,24 por 100 en 1982, aunque aumentan su participación en el valor añadido (59,11 por 100 en 1977 y 65,63 por 100 en 1982).

## B. ANALISIS DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL

El estudio sobre el sector público empresarial estatal (2) nos presenta los datos consolidados de la empresa pública no financiera (excluye servicios y organismos autónomos). En los cuadros B, C y D se recoge una síntesis del mismo. En la estructura económica o activo se mantiene el peso del inmovilizado, 62 por 100, y destaca la participación de las partidas de existencias y deudores (superior al 30 por 100) como se ve en el análisis comparativo con la empresa privada.

La cuenta de resultados refleja un incremento de las cifras de pér-

didias, 46,2 por 100 en 1982 y 25 por 100 en 1983, pasando de suponer el 8,07 por 100 de venta o producción en 1981, al 9,97 por 100 en 1982 y 11,07 por 100 en 1983. Destaca el aumento de los gastos financieros sobre ventas, del 10,56 por 100 en 1981 al 11,32 por 100 en 1982 y 12,09 por 100 en 1983; mientras que los gastos de personal se mantienen alrededor del 23,7 por 100 de la venta.

Como consecuencia de este hecho, el valor añadido sobre la producción, que es el 33 por 100, es absorbido por los gastos de personal, el 72,1 por 100 (con un peso estable en el período), y por los gastos financieros (32,08 por 100 en 1981 y 36,5 por 100 en 1983).

CUADRO C

### EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE (Porcentaje s/total activo = total pasivo = 100)

#### SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL (Incluida Telefónica)

EJERCICIO	1981	1982	1983
Número de empresas tratadas ... ..	210	233	244
<b>ACTIVO</b>			
1.1. Inmovilizado material ... ..	58,59	56,82	57,99
1.2. Inmovilizado inmaterial ... ..	0,98	1,19	1,39
1.3. Inmovilizado financiero ... ..	2,48	2,42	3,16
2. Existencias ... ..	15,81	16,38	14,72
3. Deudores ... ..	16,02	17,02	16,16
4. Cuentas financieras ... ..	3,20	3,85	4,14
5. Sit. transitorias de financiación ... ..	1,06	0,59	0,34
6. Ajustes por periodificación ... ..	1,86	1,73	2,10
<b>TOTAL ACTIVO ... ..</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PASIVO</b>			
1. Neto patrimonial ... ..	18,92	16,68	13,44
2. Intereses minoritarios ... ..	9,01	7,85	8,39
3. Reserva de consolidación ... ..	0,30	0,30	1,11
4. Provisiones ... ..	0,35	0,49	0,48
5. Deudas a largo y medio plazo ... ..	40,76	44,01	44,88
6. Deudas a plazo corto ... ..	28,57	28,78	29,67
7. Ajustes por periodificación ... ..	2,09	1,89	2,03
<b>TOTAL PASIVO ... ..</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

La estructura de capital (capital ajeno/capital propio) que recoge es del 2,54 por 100 en 1981, 3,02 por 100 en 1982 y 3,36 por 100 en 1983, donde se refleja el creciente endeudamiento de las empresas públicas.

La rentabilidad de la inversión (resultado económico neto/activo medio) era del 1,35 por 100 en 1981, 0,75 por 100 en 1982 y 0,45 por 100 en 1983, consecuencia de la caída del margen, ante una rotación estable. La caída de la rentabilidad se explica básicamente por la disminución del margen debido al aumento de los gastos financieros y al saneamiento (cartera de valores y extraordinarios) ante un resultado bruto de explotación estable.

## NOTAS

(1) La Intervención General de la Administración del Estado ha publicado en 1984 las Cuentas de las Empresas Públicas del año 1982, recogiendo las empresas públicas no financieras y las instituciones financieras públicas. Igualmente ha publicado las Cuentas de las Instituciones Financieras Públicas, años 1977-81, por lo que se dispone de la serie de las cuentas del total de las empresas públicas de 1977-1982.

(2) CICEP, *Análisis del sector público empresarial en el ejercicio 1983 y su evolución en el trienio 1981-83*, IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda, 1984.

### CUADRO D

#### ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS (Porcentaje sobre producción bruta del ejercicio = 100)

#### SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL (Incluida Compañía Telefónica Nacional de España, S. A.)

EJERCICIO	1981	1982	1983
Número de empresas tratadas ... ..	210	233	244
CONCEPTO	1981	1982	1983
Ventas netas e ingresos accesorios ... ..	94,28	93,99	96,86
+ Δ existencias prod. termin. y en curso ...	2,50	2,62	(0,44)
+ Trabajos realizados para inmov. ... ..	3,22	3,39	3,58
(*) Subvenciones a la explotación ... ..	—	—	—
= Producción bruta ejercicio ... ..	100,00	100,00	100,00
— Compras netas ... ..	50,22	47,47	47,71
+ Δ existencias primeras mat. y merc. ...	2,36	1,06	1,30
— Trab., suministros, fletes y div. ... ..	15,48	17,22	17,02
— Tributos ... ..	3,75	3,37	3,43
= Valor añadido ... ..	32,91	33,00	33,14
— Gastos de personal ... ..	23,77	23,69	23,88
= Resultado eco. bruto explotac. ... ..	9,13	9,31	9,26
— Amortizaciones ... ..	7,02	7,13	7,39
— Dot. neta a prov. de explot. e I.D. ... ..	0,52	1,15	1,09
= Resultado económico neto ... ..	1,59	1,02	0,78
+ Ingresos financieros ... ..	1,06	1,40	1,50
— Gastos financieros ... ..	10,56	11,32	12,09
+ Resultados extraordinarios y de la carter a de valores ... ..	(0,15)	(1,08)	(1,26)
= Resultado del ejercicio ... ..	(8,07)	(9,97)	(11,07)

(\*) Las subvenciones a la explotación aparecen reflejadas, pero no se computan.

Fuentes: CICEP, *Análisis del Sector Público Empresarial en el ejercicio 1983*. IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1984, págs. 32 y 40.

## ANEXO II DATOS DE LOS "GRUPOS" DE EMPRESAS PUBLICAS

TABLA A  
INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA (INI)

	1980	1981	1982	1983
Número de empresas:				
Con participación directa y mayoritaria ... ..	63	65	63	65
Filiales y subfiliales ... ..	101	132	154	188
Con participación minoritaria ... ..	338	388	422	470
Empleo (a 31-XII) (5) ... ..	243.530	213.767 (1)	219.616	216.698
		<i>(En millones de pesetas)</i>		
Inversión real ... ..	178.561	210.073	187.858 (2)	174.074
Ingreso explotación ... ..	975.831	1.012.850	1.320.545	1.534.669
Valor Añadido Bruto ... ..	433.346	461.561	534.063	588.292
Subvención a la explotación, cargas impropias.	—	21.605	26.772	30.982 (4)
Beneficio o pérdida ... ..	— 72.973	— 100.105	— 137.943	— 204.183 (3)
Subvenciones, compensaciones pérdidas, etc.	—	19.984	83.317	72.000

(1) La variación de personal en este año con relación al precedente es consecuencia de la inclusión en 1980 de empresas consideradas de participación directa y que posteriormente han pasado a ser definidas como filiales, éstas daban empleo a 16.855 personas, por tanto la disminución del empleo del INI ha sido de 12.907 puestos. En 1983 se han incluido las filiales: ENHER, ENCASUR, GESA y UNELCO participadas por Endesa.

(2) Como inversión de 1982 y 1983 se consideran las variaciones del inmovilizado material e inmaterial bruto.

(3) Las pérdidas incluyen 161.542 millones del año, ajustes de existencias en astilleros y bienes de equipo por 34.091 millones y otros ajustes contables.

(4) Las subvenciones incluyen las recibidas para compensar déficits Hunosa, Astano o bien asignadas a productos.

(5) Sin considerar cambios en las empresas, el empleo en el grupo ha sido: 1980, 228.844; 1981, 227.455; 1982, 219.616, y 1983, 216.698.

Fuente: Memorias INI 1980, 1981 y 1982. Los datos de 1983 (provisionales): INI y elaboración propia.

TABLA B  
INSTITUTO NACIONAL DE HIDROCARBUROS (INH)

	1980	1981	1982	1983
Número de empresas:				
Con participación directa y mayoritaria ... ..	7	7	7	7
Filiales y subfiliales ... ..	18	21	24	24
Con participación minoritaria ... ..	15	19	20	20
Empleo (a 31-XII) ... ..	21.267	21.187	21.003	20.194
		<i>(En millones de pesetas)</i>		
Inversión real ... ..	51.562	59.989	95.897	63.825
Ingreso explotación ... ..	676.230	989.648	1.049.206	1.207.290
Valor Añadido Bruto ... ..	142.989	202.703	222.703	258.698
Subvención a la explotación, cargas impropias.	12.800	9.104	1.200	—
Beneficio o pérdida ... ..	7.767	1.162	3.644	11.771
Subvenciones, compensación pérdidas, inversión, etc. ... ..	—	7.823	7.583	11.000

Fuentes: Memorias INI y DGPE 1980; Memorias INH 1981 y 1982, y datos facilitados por el INH 1983.

**TABLA C**  
**DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (DGPE)**

	1980	1981	1982	1983(2)
Número de empresas:				
Con participación directa y mayoritaria .....	22	24 (1)	25 (1)	25
Filiales y subfiliales .....	53	61	65	65
Con participación minoritaria .....	72	84	82	82
Empleo (a 31-XII) .....	89.426	91.777	96.247	100.168
		<i>(En millones de pesetas)</i>		
Inversión real .....	132.341	154.771	163.570	182.284
Ingresos explotación .....	562.269	660.535	838.346	1.003.501
Valor Añadido Bruto .....	263.159	321.286	373.723	420.000
Subvención a la explotación, cargas impropias.	6.975	8.781	9.996	6.865
Beneficio o pérdida (2) .....	42.477	45.771	46.046	52.436
Subvenciones, compensación pérdidas, inversión, etc. ....	29	—	—	—

(1) EIRASA e IMPROASA sin actividad en 1981 y 1982.

(2) Incluye el beneficio contable más cánones pagados al Estado por ALDEASA, Telefónica y Salinas de Torreveja.

Fuentes: Memorias DGPE 1980, 1981 y 1982. 1983, datos provisionales facilitados DGPE y elaboración propia.

**TABLA D**  
**SOCIEDADES Y EMPRESAS ESTATALES**  
**(RENFE, FEVE, RTVE, CANAL ISABEL II, PUERTOS AUTONOMOS, SEPES)**

	1980	1981	1982	1983
Número de empresas:				
Con participación directa y mayoritaria .....	8	14	14	14
Filiales y subfiliales .....	4	20	19	19
Con participación minoritaria .....	5	5	6	6
Empleo (a 31-XII) .....	79.682	90.402	95.229	96.131
		<i>(En millones de pesetas)</i>		
Inversión real .....	60.952	82.610	98.469	130.268
Ingreso explotación .....	91.573	131.261	162.293	190.453
Valor Añadido Bruto .....	51.791	86.024	81.643	93.278
Subvención a la explotación, cargas impropias.	4.374	10.826	11.833	6.500
Beneficio o pérdida .....	- 66.761	- 80.280	- 125.272	- 153.679
Subvenciones, compensación pérdidas, inversión, etc. ....	65.105	54.500	85.122	105.000

Fuentes: Memorias de RENFE, FEVE, Canal de Isabel II, 1980, 1981 y 1982. 1983, datos facilitados por las empresas y Presupuesto y Liquidación de Presupuesto 1982 y 1983.

**TABLA E**  
**ORGANISMOS AUTONOMOS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, FINANCIEROS**

	1980	1981	1982	1983
Número de empresas:				
Con participación directa y mayoritaria .....	87	85	84	82
Filiales y subfiliales .....	4	4	4	4
Con participación minoritaria .....	—	—	—	—
Empleo (a 31-XII) .....	70.932	62.197	62.840	62.000
	<i>(En millones de pesetas)</i>			
Inversión real .....	37.949	77.857	121.346	148.837
Ingreso explotación .....	246.668	247.120	327.832	371.000
Valor Añadido Bruto .....	186.788	163.357	208.708	237.191
Subvención a la explotación, cargas impropias.	58.675	61.208	70.263	70.735
Beneficio o pérdida (después de subvenciones dadas) .....	29.579	19.943	44.875	76.086
Subvenciones, compensación pérdidas, inversión, etc. ....	—	—	—	—

Fuentes: Presupuestos y Liquidación de Presupuestos 1980, 1981, 1982 y 1983, y Cuentas de las Empresas Públicas 1980-1982.

**TABLA F**  
**CORREOS Y TELECOMUNICACIONES**

	1980	1981	1982	1983
Número de empresas:				
Con participación directa y mayoritaria .....	1	1	1	1
Filiales y subfiliales .....	—	—	—	—
Con participación minoritaria .....	—	—	—	—
Empleo (a 31-XII) .....	62.449	59.637	61.232	62.943
	<i>(En millones de pesetas)</i>			
Inversión real .....	3.068	4.493	5.439	7.142
Ingreso explotación monetaria .....	37.869	45.489	47.041	52.656
Valor Añadido Bruto .....	34.084	42.446	43.550	51.610
Subvención a la explotación, cargas impropias (ingresos no monetarios) .....	4.433	5.995	8.051	13.283
Beneficio o pérdida .....	— 8.595	— 7.273	— 13.230	— 9.637
Subvenciones, compensación pérdidas, inversión, etc. ....	8.595	4.644	11.558	9.637

Fuente: Memorias de Correos y Telecomunicaciones 1980, 1981, 1982 y 1983.

## SITUACION DE LA EMPRESA PUBLICA Y PRIVADA ESPAÑOLA A TRAVES DE LA CENTRAL DE BALANCES

La Central de Balances de empresas no financieras del Banco de España viene desarrollando una meritoria labor de recogida y tratamiento de los datos relativos a la situación económico-financiera de las empresas españolas.

Realizado ya el análisis de los ejercicios 1981 y 1982, difundió, en el mes de octubre del año 1984, un avance de los resultados de 1983, comparándolos con los del ejercicio 1982, avance que se considera puede ser suficientemente significativo y marcar, en líneas generales, con bastante aproximación, los rasgos básicos, desde el punto de vista económico-financiero, de nuestras empresas. Para ello, actuando sobre un total de 1.840 empresas, de las que 1.595 son privadas y 245 públicas, cuyos empleados representan un 20 por 100 aproximadamente de la población activa (aunque con un reparto muy disperso por sectores, que varía desde el 0,3 al 76,2 por 100, ex-

cluidos los sectores agrario, pesca y otros servicios), ha analizado sus cuentas de resultados, su estructura financiera, su estructura económica, la relación existente entre el personal y las empresas con pérdidas y sin pérdidas, y la evolución del empleo.

En todo caso, el trabajo, cuyo avance se comenta, distingue la situación entre empresas públicas y privadas, lo que permite una fácil comparación entre unas y otras, que resumimos a continuación.

### 1. Cuenta de resultados

El dato más significativo que muestra el análisis realizado por la Central de Balances es el incremento de los *beneficios* netos totales de las *empresas privadas* en un 148 por 100 sobre los de 1982, en tanto que las *empresas públicas* han experi-

mentado un aumento de las *pérdidas* del 56 por 100.

Tres razones aparecen como determinantes de esta evolución del resultado:

1. Las empresas privadas han moderado sus gastos de personal (del 18,7 por 100 en 1982, han pasado al 18,2 en 1983), en tanto que las públicas no sólo no han realizado una actuación semejante, sino que los han incrementado (del 21,9 por 100 en 1982 al 22 por 100 en 1983).

2. Una notable mejoría, en las empresas privadas, de los resultados extraordinarios y de la cartera de valores, que pasa del -0,5 por 100 en 1982 al 0 por 100 en 1983, en tanto que en las empresas públicas es del -0,4 por 100 en 1982 y del -0,5 por 100 en 1983.

3. Aunque la presentación de los datos correspondientes al estado de resultados se realiza en forma porcentual y no en valores ab-

CUADRO N.º 1

CONCEPTO	DATOS EN MILES DE MILLONES DE PESETAS						% VARIACION DE LOS VALORES ABSOLUTOS ENTRE 1982 Y 1983		
	1982			1983			Empresas privadas	Empresas públicas	Total empresas
	Empresas privadas	Empresas públicas	Total empresas	Empresas privadas	Empresas públicas	Total empresas			
Patrimonio neto .....	2.741	1.949	4.690	3.690	2.373	6.063	35	22	29
Recursos ajenos a medio y largo plazo.	2.178	2.529	4.707	2.717	2.922	5.640	25	16	20
Financiación bancaria a corto plazo ...	729	634	1.363	847	834	1.681	16	32	23
<b>TOTAL</b> .....	<b>5.648</b>	<b>5.112</b>	<b>10.760</b>	<b>7.254</b>	<b>6.129</b>	<b>13.384</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>24</b>

solutos, lo que impide, por el momento, sentar conclusiones firmes, parece que la variación de existencias, de productos terminados y en curso es el tercero de los elementos que han influido en los diferentes resultados de las empresas privadas y de las públicas. Mientras que en las primeras la variación porcentual ha sido del -9,5 por 100 en los años considerados, en las públicas se eleva al -118 por 100. Con toda cautela, puede enunciarse la hipótesis de que se han vendido existencias de ejercicios anteriores a precios inferiores a su coste, con mayor entidad en las empresas públicas que en las privadas.

Por último, y con validez para ambos grupos de empresas, la cuenta de resultados recoge una mejora en los ingresos financieros. Para las

privadas, han pasado del 0,9 por 100 en 1982 al 1,1 por 100 en 1983, en tanto que en las públicas la variación ha sido del 1,1 por 100 al 1,4, en los mismos años. Mejora posiblemente debida a una más cuidada atención al manejo de la tesorería y a la utilización de los instrumentos que el sistema brinda en los años de referencia.

En todo caso, y en cuanto que los porcentajes pueden resultar engañosos, conviene subrayar la modestia de la mejora del resultado financiero. Así, como señala el avance de la Central de Balances, «por cada 100 pesetas invertidas en activo neto en 1983, la empresa privada obtiene con su actividad económica 5,3 pesetas, y la pública, 3,6 pesetas; al remunerar los recursos ajenos con el 14,5 y 14 por 100,

respectivamente, y activar el 36 y 15 por 100, también respectivamente, de los gastos financieros, la rentabilidad del patrimonio neto es del 2,8 por 100 para las empresas privadas y del -8,7 por 100 para las empresas públicas.

Para terminar, la importancia de las subvenciones a la explotación (0,3 por 100 para las privadas y 4,8 por 100 para las públicas en 1982) ha permanecido igual, en porcentajes, para las primeras, en tanto que ha aumentado al 5,3 por 100 para las segundas.

## 2. Estructura financiera

La nota más destacada en este punto es la mejora en ambos grupos de empresas, si bien en mayor medida en las privadas que en las

CUADRO N.º 2

	VARIACION (1982-1983)		COMPONENTES DE LA VARIACION					Otros
	Miles de millones	% s/1982	Accionistas (Por suscripción de acciones menos reducción capital)	Subvenciones de capital	Regularizaciones	Saneamientos de activos	Aplicación de resultados	
	(A)	% s/(A)	% s/(A)	% s/(A)	% s/(A)	% s/(A)	% s/(A)	
Empresas privadas...	949	35	4	-	100	- 5	1	-
Empresas públicas ...	423	22	37	47	90	-11	-56	-6
<b>Total empresas</b> ...	<b>1.372</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>95</b>	<b>- 7</b>	<b>-17</b>	<b>-1</b>

CUADRO N.º 3

APORTACIONES Y SUBVENCIONES	EMPRESAS PRIVADAS		EMPRESAS PUBLICAS		TOTAL EMPRESAS	
	Miles de millones	% s/total	Miles de millones	% s/total	Miles de millones	% s/total
Por accionistas ...	41	68	157	27	198	31
Por subvenciones de capital ...	4	6	198	34	202	31
<b>Aportación recursos propios</b> ...	<b>45</b>	<b>74</b>	<b>355</b>	<b>61</b>	<b>400</b>	<b>62</b>
Por subvenciones de explotación ...	16	26	224	39	240	38
<b>TOTAL</b> ...	<b>61</b>	<b>100</b>	<b>579</b>	<b>100</b>	<b>640</b>	<b>100</b>

públicas, debido fundamentalmente a la regularización de balances (cuadro n.º 1).

El incremento del patrimonio neto se debe a los componentes que se presentan en el cuadro n.º 2.

En el cuadro n.º 2 se observa claramente la importancia de la regularización de balances en las empresas privadas, frente a las amplia-

ciones netas de capital en las públicas.

Igualmente, en estas últimas, las subvenciones en capital representan una partida mucho más importante que en las privadas, como queda de manifiesto en el cuadro número 3.

### 3. Estructura económica

El cuadro n.º 4 nos ofrece la estructura económica de las empresas españolas.

Se observa el crecimiento del inmovilizado neto, con regularización del 34 por 100 en las empresas privadas y el 22 por 100 en las públi-

CUADRO N.º 4

CONCEPTO	DATOS EN MILES DE MILLONES DE PESETAS						% VARIACION DE LOS VALORES ABSOLUTOS ENTRE 1982 Y 1983		
	1982			1983			Empresas privadas	Empresas públicas	Total empresas
	Empresas privadas	Empresas públicas	Total empresas	Empresas privadas	Empresas públicas	Total empresas			
Inmovilizado neto .....	4.510	4.213	8.723	6.028	5.131	11.159	34	22	28
Activo circulante neto .....	1.138	899	2.037	1.226	999	2.225	8	11	9
<b>Activo neto .....</b>	<b>5.648</b>	<b>5.112</b>	<b>10.760</b>	<b>7.254</b>	<b>6.130</b>	<b>13.384</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>24</b>

CUADRO N.º 5

CONCEPTO	NUMERO DE EMPRESAS (%)					
	1982			1983		
	Empresas privadas	Empresas públicas	Total empresas	Empresas privadas	Empresas públicas	Total empresas
Empresas con pérdidas .....	28	45	30	23	53	27
Empresas sin pérdidas .....	72	55	70	77	47	73
<b>TOTAL .....</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

CUADRO N.º 6

CONCEPTO	NUMERO DE EMPLEADOS (en miles)						% VARIACION DE LOS VALORES ABSOLUTOS ENTRE 1982 Y 1983		
	1982			1983			Empresas privadas	Empresas públicas	Total empresas
	Empresas privadas	Empresas públicas	Total empresas	Empresas privadas	Empresas públicas	Total empresas			
Empresas con pérdidas .....	181	214	396	146	228	375	-19,5	6,5	-5,4
Empresas sin pérdidas .....	317	248	565	346	233	579	9,2	-6,0	2,5
<b>TOTAL .....</b>	<b>498</b>	<b>462</b>	<b>961</b>	<b>492</b>	<b>461</b>	<b>954</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,7</b>

CUADRO N.º 7

EMPRESAS PRIVADAS	NUMERO DE EMPRESAS	NUMERO DE EMPLEADOS (en miles)					
		Año 1982			Año 1983		
		Fijos	No fijos	Total	Fijos	No fijos	Total
Con pérdidas en 1982 y 1983	259	130,4	3,0	133,4	124,2	3,0	127,2
Con pérdidas en 1982 y sin pérdidas en 1983.	182	45,9	2,5	48,4	44,4	3,1	47,5
Sin pérdidas en 1982 y 1983	1.044	276,1	21,1	297,2	276,7	22,5	299,2
Sin pérdidas en 1982 y con pérdidas en 1983.	110	18,7	1,4	20,1	18,0	1,1	19,1
<b>TOTAL</b>	<b>1.595</b>	<b>471,1</b>	<b>28,0</b>	<b>499,1</b>	<b>463,3</b>	<b>29,7</b>	<b>493,0</b>

EMPRESAS PUBLICAS	NUMERO DE EMPRESAS	NUMERO DE EMPLEADOS (en miles)					
		Año 1982			Año 1983		
		Fijos	No fijos	Total	Fijos	No fijos	Total
Con pérdidas en 1982 y 1983	100	210,1	3,5	213,6	204,4	4,1	208,5
Con pérdidas en 1982 y sin pérdidas en 1983.	11	0,8	—	0,8	0,8	—	0,8
Sin pérdidas en 1982 y 1983	104	218,4	10,0	228,4	221,7	10,5	232,2
Sin pérdidas en 1982 y con pérdidas en 1983.	30	16,4	3,2	19,6	16,4	3,5	19,9
<b>TOTAL</b>	<b>245</b>	<b>445,7</b>	<b>16,7</b>	<b>462,4</b>	<b>443,3</b>	<b>18,1</b>	<b>461,4</b>

cas. Según advierte la Central de Balances, en este crecimiento tienen importancia el peso de las regularizaciones de balances (con una tasa media de regularización del inmovilizado financiero del 80 por 100 en las empresas privadas y del 20 por 100 en las públicas) y los gastos amortizables en las empresas públicas, debido a diferencias de valoración en moneda extranjera de sus pasivos (estos gastos se han incrementado en un 30 por 100).

#### 4. Relación entre personal empleado y situación empresarial

El cuadro n.º 5 revela la situación de las empresas encuestadas, distinguiendo las que han tenido pérdidas y las que han obtenido beneficios.

Por otra parte, el número de empleados en ellas es el que se recoge en el cuadro n.º 6.

Por último, la evolución del empleo se muestra en el cuadro n.º 7.

Del análisis de estos datos se deduce la evidencia de que la variación en el empleo va positivamente asociada a la obtención de beneficios. Sólo a través de la recuperación de estos últimos es posible pensar en un crecimiento sostenido del empleo.